



El costo silencioso de no reformar

Ignacio Irarrázaval

Centro de Políticas Públicas UC



Modernizar el Estado suena a consigna. A algo técnico y burocrático. Pero en la práctica, se traduce en cuánto demora una obra en construirse, qué tan rápido responde un servicio público o si una política logra llegar a tiempo a quienes la necesitan. La modernización del Estado no es un fin en sí mismo. Es un camino para algo más importante: que el país, y las familias, tengan mejores condiciones para su desarrollo.

Esa es la premisa con la que, junto con el Centro de Estudios Públicos y la CPC, escribimos una agenda de propuestas para el nuevo gobierno. Chile no parte de cero. Un reciente estudio del Centro de Sistemas Públicos identificó más de 250 reformas desde el retorno a la democracia que han transformado significativamente al Estado. Hemos sido, en varios sentidos, pioneros en la región. Pero también nos hemos ido quedando atrás.

Lo que proponemos en este documento no son grandes reformas estructu-

rales. Es algo acotado y, por lo mismo, más realizable: un conjunto de medidas puntuales, técnicamente respaldadas por estudios que se han realizado en la última década, y que en varios casos corresponden a proyectos que llevan años dando vueltas en el Congreso sin concretarse. La pregunta que nos hacemos es simple: ¿por qué no avanzar ahora?

Para ilustrar el tipo de problema que queremos resolver, basta con dos ejemplos. El primero tiene que ver con la rigidez del aparato público. En Chile, modificar la estructura interna de un servicio del Estado requiere, en la mayoría de los casos, una ley. Nuestra propuesta es entregar más flexibilidad a los jefes de servicio para modificar su orgánica interna. No se trata de dar carta blanca, sino de salir de la rigidez que hoy inmoviliza al Estado frente a problemas emergentes.

El segundo ejemplo tiene que ver con la inversión pública. En la práctica,

los recursos de inversión se han usado sistemáticamente para financiar gasto corriente. Proponemos dos medidas: automatizar el proceso de identificación de proyectos mediante bases de datos compartidas entre ministerios, Dipres y Contraloría, y establecer que, ante una subejecución de la inversión, se reduzca automáticamente el gasto

total autorizado, impidiendo pasar esos recursos a gasto corriente.

Estos son solo dos ejemplos de las quince propuestas. Todas pueden implementarse en plazos relativamente breves, tienen impacto real en la gestión del Estado y apuntan a problemas transversales.

“La tentación siempre es esperar la reforma grande o el proyecto definitivo. Mientras tanto, los problemas persisten”.

La tentación, siempre presente en la política, es esperar la reforma grande o el proyecto definitivo. Mientras tanto, los problemas persisten. Nuestra invitación al nuevo gobierno es más pragmática: hay cosas que se pueden hacer hoy, con voluntad política y en plazos acotados. Empecemos por ahí.